

13è. Seminari d'actualització jurídica CSITAL de Lleida. 2018

Jornada del 18 de maig de 2018

Ramon Morell Gassó
Secretari de l'Ajuntament de Tàrrrega

Normativa

- **Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.**
- **Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2016 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.**

Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

Origen: disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), introducida el 2014 mediante la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la deuda comercial en el sector público.

Requisitos:

1. **Superávit .**
2. **Remanente de tesorería para gastos generales positivo.**
3. **Nivel de deuda pública inferior al límite a partir del cual está prohibido el recurso al endeudamiento,**
4. **Período medio de pago a proveedores que no supera el plazo máximo de pago establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.**
5. **Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias**
6. **Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.**

Artículo 1. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2017.

En relación con el destino del superávit presupuestario de las Corporaciones Locales correspondiente al año 2017 se prorroga para 2018 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2018, la parte restante del gasto autorizado en 2018 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2019, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2018 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2019.

Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

Artículo 2. Modificación del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se modifican los apartados 1 y 2 de la disposición adicional decimosexta (**Inversión financieramente sostenible**) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que quedan redactados en los siguientes términos:

«1. Que la inversión se realice, en todo caso, por Entidades Locales que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

A) Además, deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales:

- 160. Alcantarillado.
- 161. Abastecimiento domiciliario de agua potable.
- 162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
- 165. Alumbrado público.
- 172. Protección y mejora del medio ambiente.
- 412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
- 422. Industria.
- 425. Energía.
- 431. Comercio.
- 432. Información y promoción turística.
- 441. Transporte de viajeros.
- 442. Infraestructuras del transporte.
- 452. Recursos hidráulicos.
- 463. Investigación científica, técnica y aplicada.
- 491. Sociedad de la información.
- 492. Gestión del conocimiento.

Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

B) La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas siguientes:

132. Seguridad y Orden Público.

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

135. Protección civil.

136. Servicio de prevención y extinción de incendios.

153. Vías públicas.

171. Parques y jardines.

231. Asistencia social primaria.

321. Creación de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria.

323. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.

332. Bibliotecas y Archivos.

333. Equipamientos culturales y museos.

336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.

342. Instalaciones deportivas.

453. Carreteras.

454. Caminos vecinales.

933. Gestión del patrimonio, en el que se podrán incluir las aplicadas a la rehabilitación, reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público incluyendo las actuaciones de adaptación de infraestructuras que permitan la accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas mayores.

Cuando exista gasto de inversión en estos últimos grupos de programas, y se incurra en un gasto de inversión en el conjunto de grupos de programas citados en este apartado superior a 15 millones de euros o al 40 % del gasto no financiero total de la entidad local respectiva y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión se requerirá autorización previa de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como las que se refieran a mobiliario y enseres, salvo que se destinen a la prestación de servicios asociados a los grupos de programas recogidos en el apartado anterior. También quedan excluidas las inversiones en vehículos, salvo que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, y de transporte de viajeros

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2016 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.

El artículo 118 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 establece la fórmula para el cálculo del esfuerzo fiscal de 2016 de los municipios, necesario para proceder a la liquidación definitiva de su participación en los tributos del Estado correspondiente a 2018. Esta fórmula se desarrolla en términos análogos a los ejercicios anteriores.

Dicha presentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 del mismo Proyecto de Ley, podrá realizarse en papel o a través de su transmisión telemática con la firma electrónica del Interventor...

Apartado 1. Información a suministrar por las Corporaciones Locales.

1.1 Información básica: Los ayuntamientos deberán aportar certificación de los siguientes datos referidos al ejercicio 2016:

a) Recaudaciones líquidas de los siguientes tributos:

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto de naturaleza urbana como de naturaleza rústica.

– Impuesto sobre Actividades Económicas.

– Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

b) Base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

c) Tipos de gravamen aplicados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto de naturaleza urbana como rústica y, en su caso, el correspondiente a los bienes inmuebles de características especiales.

d) Cuota tributaria total exigible en el municipio por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

1.2 Información complementaria: En el caso de que la gestión recaudatoria esté encomendada a otro ente territorial a cuya demarcación pertenezcan los ayuntamientos se deberá remitir, además, certificado de la recaudación obtenida por aquel ente...deberá quedar constancia de que los ingresos corresponden al ejercicio 2016 y que han sido recaudados dentro del período voluntario. Igualmente, habrá de especificarse que la recaudación líquida por el Impuesto sobre Actividades Económicas contenida en las certificaciones expedidas, corresponde exclusivamente a ingresos municipales, excluidos en su caso los recargos a favor de entes provinciales y las cuotas nacionales y provinciales.

Apartado 2. Remisión de la información a las Delegaciones de Economía y Hacienda.

Los ayuntamientos la remitirán a la Delegación de Economía y Hacienda de su provincia antes del día 30 de junio de 2018.

Jurisprudència

➤ **Els acords polítics dels ens locals i el dret d'expressió.**

Autor: Eduard Paricio Rallo . Magistrat de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Article publicat a QDL42. Cuadernos de Derecho Local

Fundación Democracia y Gobierno Local

Els acords polítics dels ens locals i el dret d'expressió.

Autor: Eduard Paricio Rallo

A. Els acords polítics dels ens locals

És habitual l'adopció d'acords que es pronuncien sobre aspectes de naturalesa política; es tracta d'actes que no suposen l'exercici d'una potestat sinó la simple manifestació d'una inquietud social a propòsit de successos generals, com ara declaracions de dol, el rebuig d'atemptats, o la presa de posició contra la violència de gènere; també expressions de solidaritat, de reconeixement o reprovació d'iniciatives generals o de persones que destaquen per alguna raó; o manifestacions de caràcter ideològic.

La qüestió es planteja als efectes de determinar fins a quin punt és possible el control jurisdiccional d'aquestes decisions, o en quina mida les administracions poden manifestar-se lliurement en aquest àmbit.

Línies jurisprudencials

1. Segons si l'acord té o no repercussió jurídica.

Aquesta línia jurisprudencial ha tingut una expressió relativament recent a Catalunya a propòsit dels recursos adreçats per la Delegació del Govern contra els acords municipals referits a la sobirania fiscal, i d'inici dels mecanismes adients per efectuar el pagament de l'IRPF i l'IVA a l'Agència Tributària de Catalunya.

En termes generals els jutjats van inadmetre els corresponents recursos, en considerar que es tractava d'una manifestació de contingut polític sense efectes jurídics. La secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va abonar aquesta posició (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 1a, sentència núm. 569/2014, de 26 de juny, recurs núm. 73/2014; ponent, Emilio Aragonés Beltrán):

[...] solo cabe residenciar ante los órganos jurisdiccionales aquellos actos que quepa calificar de jurídicos, esto es, declaraciones de voluntad que tienen por fin inmediato engendrar o destruir una relación de derecho. Por tanto, tratándose de manifestaciones políticas o declaraciones de intenciones, sin existencia en el mundo del derecho y, en todo caso, sin ninguna concreción ni efecto práctico ni jurídico posible, las pretensiones deducidas han de declararse inadmisibles.

Els acords polítics dels ens locals i el dret d'expressió.

Autor: Eduard Paricio Rallo

2. Segons sí s'envaeixen o no competències alienes o excedeixen de l'àmbit de les competències locals.

La jurisprudència ha estat constant en el rebuig de les resolucions municipals que considera que envaeixen competències alienes o que, simplement, excedeixen l'àmbit de les competències locals. En aquests casos el Tribunal constata que no es tracta d'una mera manifestació formal o simbòlica, sinó d'una resolució amb efectes materials i jurídics que afecta competències alienes.

És el cas, per exemple, d'acords relatius a l'atorgament de subvencions a associació d'electes que no acrediten activitat en el terme municipal (Tribunal Suprem, sentència de 21 de juny de 2006, recurs núm. 10442/2003):

[...] no nos encontramos, pese a que el destinatario final de la subvención sea la misma Asociación, en supuestos idénticos. Ciertamente tanto en el caso de autos como en aquellos estamos ante entes locales, si bien allí de ámbito provincial y aquí ante un ente municipal, es decir de ámbito territorial más limitado.... no queda justificada en el supuesto de autos que dicha asignación surta efectos en el término municipal, único territorio que, conforme al art. 12 LBRL, ejerce sus competencias el Ayuntamiento."

3. Imperatiu d'imparcialitat respecte a les declaracions polítiques.

El Tribunal Suprem s'ha pronunciat recentment sobre l'imperatiu d'objectivitat de les administracions locals a propòsit d'un recurs referit a la presència d'una bandera estelada a un local municipal en el moment de les eleccions. El Tribunal invoca en aquest cas el principi d'imparcialitat, amb un caràcter força general (sentència de 28 d'abril de 2016, recurs núm. 827/2015).

El Tribunal refereix el deure d'imparcialitat no a l'Administració sinó al Govern del municipi, atès que la col·locació de la bandera obeïa a un acord del ple. Ara bé, cal considerar que el cas té peculiaritats significatives. En primer lloc, es refereix a la col·locació de la bandera en un recinte que actua com a administració electoral. El mateix Tribunal assenyala la necessitat peremptòria d'extremar l'objectivitat davant l'acte formal de votació per part dels electors, un acte que queda protegit i aïllat del debat polític ordinari. En segon lloc, la sentència es refereix a la utilització d'uns símbols, com ho són les banderes; això és, a la utilització institucional d'un símbol aliè als símbols objectivats i formalment establerts per la normativa.

Els acords polítics dels ens locals i el dret d'expressió.

Autor: Eduard Paricio Rallo

4. Elements judicialment assequibles.

Aquesta reconducció del control jurisdiccional als conceptes judicialment assequibles és el plantejament actualment vigent en la jurisprudència ordinària.

La jurisprudència més actual ha assimilat la situació a la dels actes discrecionals (Tribunal Suprem, sentència de 20 de novembre de 2013, recurs núm. 13/2013):

[...] resulta hoy irrelevante la tradicional e histórica construcción de los actos políticos o de dirección política –como mecanismo de exención del control jurisdiccional– pues su control jurisdiccional no ofrece dudas, pero, obvio es, que circunscrito a los límites o requisitos previos que haya podido establecer el legislador mediante los citados “conceptos judicialmente assequibles”. Por ello, en la práctica, no resulta apreciable –situados en dicho ámbito– ninguna diferencia entre este control jurisdiccional y el que opera respecto de los actos discrecionales, que se realiza, fundamentalmente, mediante el control de los elementos reglados.

Conclusió: En el cas dels ens locals la Llei jurisdiccional no inclou cap previsió específicament referida a les decisions de govern. Cal deduir-ne, doncs, que la Llei jurisdiccional considera que tota l'actuació local es regeix pel dret administratiu i pot ser objecte d'un control ple, també les decisions de govern.

Els acords polítics dels ens locals i el dret d'expressió.

Autor: Eduard Paricio Rallo

B. El dret d'expressió de les entitats locals i el dels regidors.

El Tribunal Constitucional ha establert que les institucions públiques no gaudeixen del dret fonamental a la llibertat d'expressió de l'article 20 de la Constitució (STC núm. 254/93), com tampoc no són titulars de la llibertat d'informació (STC 14/93). Un plantejament que s'ha anat repetint amb posterioritat fins aquest mateix moment (Tribunal Suprem, sentència de 28 d'abril de 2016, recurs núm. 827/2015).

1. La llibertat d'expressió dels electes locals.

Tot i que és manté aquesta jurisprudència que nega d'arrel la llibertat d'expressió de les institucions públiques en general i de les administracions locals en particular, també hi ha pronunciaments molt més matisats que admeten un cert marge en aquest sentit. Així algunes sentències semblen fer derivar la legitimitat dels acords locals de la llibertat d'expressió no de l'ajuntament com a tal, però sí dels membres de la corporació, en una mena de vessant col·lectiva d'aquest dret.

La jurisprudència constitucional ha remarcat que la llibertat d'expressió dels càrrecs públics té una intensitat especial, atès que en aquest cas conflueixen la llibertat d'expressió de l'article 20 CE i el dret d'accés als càrrecs públics de l'article 23 CE (STC 136/99):

"...cabe concluir que, cuando esas libertades aparecen "conectadas a los procesos de formación y exteriorización de un poder político democrático (art. 23 CE)", deberá garantizarse la máxima libertad –y los mayores medios– para que los individuos y los grupos hagan llegar a los electores cualquier tipo de opiniones o informaciones "para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos".

D'altra banda, en la sentència de 23 d'abril de 1992, assumpte Castells contra Espanya, el TEDH va dir:

"La libertad de expresión, preciosa para cualquier persona, lo es muy particularmente para un elegido del pueblo: representa a sus electores, expone sus preocupaciones y defiende sus intereses. "

En definitiva, la llibertat d'expressió dels regidors és un element a tenir en compte. Després de tot, el que hi ha darrera d'un acord municipal és la voluntat dels regidors que l'han votat; o, dit d'una altra manera, els càrrecs electes s'expressen també col·lectivament en els debats i les resolucions que adopten.

Els acords polítics dels ens locals i el dret d'expressió.

Autor: Eduard Paricio Rallo

2. Els pronunciaments del Tribunal Constitucional sobre la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya (STC núm. 42/2014 i STC núm. 259/2015).

Es tracta de pronunciaments del Tribunal Constitucional a propòsit de la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya en data 23 de gener de 2013, i també de la posterior Declaració de 9 de novembre de 2015, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015.

El Tribunal Constitucional aborda la qüestió d'acord amb els següents paràmetres:

- a.– La Declaració constitueix un acte acabat i definitiu, no un mer acte de tràmit.
- b.– Es tracta d'un acte polític adoptat per un poder públic, encara que també té naturalesa jurídica.
- c.– La impugnació només serà viable si, a més, la Declaració té la capacitat de produir efectes jurídics, encara que sigui de manera indiciària.
- d.– No es pot considerar que es produeixen aquests efectes jurídics respecte als ciutadans en general, perquè la Declaració és en aquest sentit una mera exhortació als mateixos.
- e.– La Declaració tampoc no té eficàcia com a acte d'impuls de l'acció del Govern.
- f.– Ara bé, el Tribunal considera que la Declaració del poble de Catalunya com a subjecte polític i jurídic sobirà, es podria entendre com un reconeixement d'unes atribucions inherents a la sobirania pels qui hagin de materialitzar el procés. Unes atribucions superiors a les pròpies d'una comunitat autònoma.
- g.– En segon lloc, es constata que la resolució inclou una declaració de naturalesa assertiva com ara l'acord d'endegar el procés per fer efectiu l'exercici del dret a decidir, declaració que no té únicament naturalesa política perquè es tradueix en accions concretes.
- h.– En aquest context, declara inconstitucional el fet que la Declaració identifiqui un subjecte sobirà diferent del poble espanyol en el seu conjunt.
- i.– Pel que fa al dret a decidir, es considera que la Declaració no exclou necessàriament la canalització d'aquest dret per vies constitucionals.
- j.– Finalment, el Tribunal recorda que són legítimes les concepcions que tinguin per objecte la modificació de l'ordre constitucional, però cal que es canalitzin per sistemes que no vulnerin els principis democràtics ni la Constitució en el seu conjunt; això és, cal que es canalitzin dins les vies de reforma que preveu la mateixa Constitució.

Els acords polítics dels ens locals i el dret d'expressió.

Autor: Eduard Paricio Rallo

El plantejament que el Tribunal Constitucional ha seguit en aquestes dues sentències constitueix ara per ara el cànon jurisprudencial vigent.

En efecte, paral·lelament a les declaracions del Parlament es van aprovar un notable nombre de declaracions municipals en les que es declarava el municipi respectiu com a territori català lliure i sobirà, afegint-hi, alhora, diversos acords mitjançant els quals s'instava el Parlament, el Govern i altres institucions a endegar el procés d'independència.

Prèviament alguns ens locals havien ja adoptat una primera generació d'acords de naturalesa semblant, en aquest cas referits a la sobirania fiscal. Ja s'ha esmentat que el Tribunal Superior de Justícia va considerar que aquests acords no desplegaven efectes jurídics, de manera que va declinar-ne el control jurisdiccional.

La primera reacció dels jutjats davant aquesta segona generació d'acords municipals va ser la mateixa, de manera que es van inadmetre els recursos formulats per la Delegació del Govern. Tanmateix, en el moment de resoldre les apel·lacions corresponents, el Tribunal Constitucional ja havia dictat les sentències esmentades en aquest apartat, de manera que la situació va canviar, atès que el perfil de les declaracions municipals era substancialment igual al de les declaracions del Parlament. Així doncs, s'han dictat un seguit de sentències disposant que, si més no, els recursos havien de ser admesos i tramitats pels jutjats (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció 5a, sentència de 4 de juny de 2015, apel·lació núm. 63/14).

El cas és que el Tribunal Constitucional recolza la seva posició en tres aspectes que considera determinants:

- 1. Que els acords tenen una naturalesa jurídica independentment de la seva naturalesa política,**
- 2. Que alguns aspectes de la decisió tenen alhora una naturalesa assertiva o asseverativa, i**
- 3. Finalment, que la declaració pot tenir efectes pràctics, específicament el reconeixement d'unes atribucions inherents a la sobirania en favor de qui hagi de materialitzar el procés.**

Així doncs, cal estar finalment a la idea que allò rellevant és si l'acte impugnat desplega efectes jurídics, és a dir, uns efectes susceptibles d'exigibilitat jurídica.

Doctrina

- **Directriu 4/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es fixen criteris d'actuació transitoris sobre la contractació menor d'acord amb la Llei 9/2017, d.e 8 de novembre, de Contractes del sector públic.**

- **Proposta d'Informe 1/2018, de 20 d'abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent)**

Assumpte: Límits a la contractació menor en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

- **Modelo estándar para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública.**

Febrero 2018 *Versión actualizada (20 de febrero)*

Autor: Juan Barberán González.

CPEN Corporación Pública Empresarial de Navarra

Directriu 4/2018 , de 23 de març de 2018, de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es fixen criteris d'actuació transitoris sobre la contractació menor d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.

...

Preàmbul.

Vistos els informes de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, núm. 41/2017 i de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón núm. 3/2018, que estableixen diferents interpretacions sobre l'aplicació de l'article 118.3 de la Llei 9/2017, i per tal de poder establir uns criteris uniformes per a totes les Administracions Públiques de Catalunya, la Direcció General de Contractació considera necessari sol·licitar a la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya com a òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les Administracions Locals de Catalunya i les entitats del sector públic, que emeti informe sobre la interpretació de l'esmentat article 118 de la LCSP.

Això no obstant, atesa la urgència de facilitar als òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic un criteri d'actuació que ofereixi seguretat jurídica ...es fixa el següent:

CRITERI D'ACTUACIÓ TRANSITORI

A partir de l'entrada en vigor de la LCSP, el que estableix l'article 159.1.3 de la Llei 5/2017, del 28 de març, en relació a la limitació de formalitzar més de dos contractes menors consecutius amb idèntic objecte i destinatari en el període inferior a l'any per tal de promoure la lliure concurrència i la publicitat contractual, s'entén en el sentit que aquests contractes no podran superar la quantia establerta per la legislació vigent per a la contractació menor referida a l'anualitat pressupostària, i en el mateix sentit la regla de l'article 118.3 de la LCSP s'ha d'entendre referida a l'anualitat pressupostària i a aquells contractes que tinguin idèntic objecte i adjudicatari.

Informe 1/2018, de 20 d'abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent)

➤ L'apartat tercer de l'article 118 de la LCSP estableix les dues obligacions de justificació següents:

– Que no s'està alterant l'objecte del contracte menor per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació; i

– Que l'empresa contractista no ha subscrit més contractes menors el valor estimat dels quals, individualment o conjuntament, superin la xifra de 40.000€ en el cas d'obres i de 15.000€ en el cas de serveis i subministraments.

Respecte d'aquesta obligació de justificació estableix alhora:

✓ l'obligació de l'òrgan de contractació de comprovar el compliment "d'aquesta regla"

✓ que queden exclosos els supòsits en què les obres, els subministraments o els serveis només es puguin encomanar a un empresari determinat, per tractar-se de la creació o l'adquisició d'una obra d'art o representació artística única, per què no hi hagi competència per raons tècniques o per què procedeixi la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial.

➤ La finalitat de la limitació establerta és :

A) Quan a l'objecte dels contractes:

1ª - Evitar el fraccionament de l'objecte dels contractes.

Aquesta és la finalitat que atribueix la Junta Consultiva de l'Estat en els Informes emesos en els expedients 41/2017 i 42/2017.

2ª Evitar que es cobreixin necessitats recurrents o periòdiques a través de contractes menors, bé per una incorrecta planificació o bé per un mal ús d'aquests contractes.

Aquesta és la finalitat que ha atribuït la Junta Consultiva d'Aragó a la limitació que s'analitza en l'Informe 3/2018, de 13 de febrer, i el de la JCCA de Catalunya en l'informe 14/2014, de 22 de juliol.

B) Quan a les empreses que han de ser contractistes:

3ª Evitar l'adjudicació directa de contractes menors de manera reiterada a la mateixa empresa, és a dir, incrementar la competència i promoure la diversificació d'empreses que resulten adjudicatàries d'aquests contractes, "repartint" el mercat per evitar generar desigualtats entre les empreses afavorint sempre a la mateixa.

Proposta d'Informe 1/2018, de 20 d'abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent)

➤ Àmbit temporal de la limitació.

El període anual que cal entendre com a àmbit temporal aplicable a la limitació de subscriure un determinat volum de contractes menors amb una mateixa empresa contractista, **es considera convenient computar-lo per exercici pressupostari**, tant amb la finalitat de permetre el control del compliment de dita com per ser aquesta la base sobre la que les entitats del sector públic han d'efectuar la programació de la seva contractació.

➤ Moment a partir del qual s'aplica i es computa la limitació.

Tant la limitació que estableix com les obligacions de justificació que imposa s'apliquen únicament als contractes menors que es subscriuguin amb posterioritat a l'entrada en vigor de la LCSP.

Qüestió diferent és la de si, per entendre copat el volum màxim de contractes menors que es pot subscriure amb una mateixa empresa cal tenir en compte únicament els contractes subscrits amb aquesta a partir de l'entrada en vigor de la LCSP o tots els contractes menors que s'hagin subscrit amb aquella determinada empresa en l'exercici pressupostari en què ha entrat en vigor la Llei. Respecte d'aquesta qüestió, si bé s'entén el criteri de la Junta de l'Estat de què comptabilitzar en el volum màxim els contractes menors subscrits en el període que es prengui com a referència no comporta una aplicació retroactiva de la norma, en la mesura que la limitació i les obligacions de justificació que imposa s'apliquen únicament als contractes menors subscrits un cop ha entrat en vigor la LCSP, també s'entén que tenir en compte contractes menors anteriors a dita entrada en vigor, a efectes del còmput del volum màxim de contractes menors amb una mateixa empresa, comporta de facto aplicar també a aquells contractes la limitació que s'analitza. Per aquest motiu, **es considera més conforme a dret que tot el règim derivat de l'article 118.3 de la LCSP, inclòs l'inici del còmput del volum màxim de menors, s'apliqui prenent com a data d'inici de dita aplicació, la de l'entrada en vigor de la Llei.**

Proposta d'Informe 1/2018, de 20 d'abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent)

➤ Àmbit objectiu de la limitació.

La limitació de subscriure un determinat volum de contractes menors amb una mateixa empresa contractista cal entendre-la referida a **contractes amb els mateixos objectes, considerats com aquells que es componen de prestacions coincidents substancialment.**

La coincidència d'objectes contractuals cal establir-la en funció de similitud de les prestacions que els componen, **sense haver de tenir en compte, a aquests efectes, la diferenciació entre les unitats destinatàries del contracte d'un mateix òrgan de contractació.** De fet, entendre-ho altrament consistiria, de facto, en interpretar que el límit que s'analitza s'estableix, no per òrgan de contractació i per objecte contractual, sinó per unitats destinatàries.

Així mateix, es considera que **tampoc es pot circumscriure la identitat d'objectes als supòsits en què aquests tinguin “un mateix àmbit temporal de prestació, execució o lliurament”**, els quals dependran de les característiques concretes de les necessitats puntuals que s'hagin de cobrir amb contractes menors, de manera que previsiblement aniran variant, podent donar lloc, per tant, aquesta interpretació, a l'elusió de la limitació, amb la consegüent pèrdua de la finalitat que pretén.

➤ Opera aquest límit en cas de consulta a tres o més empreses o la seva publicació en el perfil del contractant ?

La LCSP no conté cap excepció a l'aplicació de la limitació establerta en l'article 118, i amb la voluntat de no fer dir a la Llei allò que no diu més enllà del que és estrictament indispensable per poder aplicar-la –com són el límit subjectiu, objectiu i temporal que s'han analitzat–, cal afirmar que l'única via prevista en la LCSP per evitar l'aplicació del límit d'adjudicació de contractes menors a una mateixa empresa és, justament, no subscriure aquests contractes, sinó contractes de valors estimats reduïts a través del procediment obert simplificat abreujat.

El fet de donar publicitat als contractes menors, o de sol licitar ofertes a un nombre determinat d'empreses, no impedeix que, si el contracte que es licita és un contracte menor, li resultin d'aplicació totes les limitacions que l'article 118.3 de la LCSP estableix, sense preveure'n excepcions, per aquests contractes

DECRETO-LEY 1/2018, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón de medidas urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía.

Preámbulo

...

Uno de los objetivos esenciales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha sido imponer la máxima publicidad, transparencia y concurrencia en la contratación, incidiendo especialmente sobre procedimientos previstos en la normativa anterior como el ... el contrato menor ... **durante la tramitación parlamentaria de la Ley... se introdujo la prohibición de que un mismo contratista suscriba contratos menores por importe que, individual o conjuntamente, supere los umbrales previstos.**

No obstante, tal y como señaló la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su Informe 3/2018, de 13 de febrero, dicha prohibición debería ceñirse única y exclusivamente a los supuestos de adjudicación directa en los que no haya habido publicidad o concurrencia. La norma estatal cuenta con un “vacío legal” en la regulación del procedimiento del contrato menor al no haberse previsto los efectos que produce en su tramitación la evacuación de un trámite de publicidad en el perfil de contratante. Esa falta de previsión produce inseguridad jurídica entre los gestores y los operadores económicos, y de ahí deriva la situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifica esta intervención por vía de Decreto-ley.

Las disposiciones contenidas en este Decreto-ley desarrollan las que se recogen en el artículo 118 de la Ley 9/2017, en relación con la tramitación de los expedientes de contratos menores. En esta ocasión, lo que se hace es regular una tramitación con publicidad del procedimiento de contrato menor, con pleno respeto a los elementos definidores de dicho procedimiento, tales como la cuantía máxima de los contratos que pueden adjudicarse con arreglo al mismo, o los documentos que deben constar en el expediente .

Artículo único. Modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.

Se añade un segundo párrafo al apartado 2 del artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:

“2. [...].

La licitación de los contratos menores, cualquiera que sea su cuantía, podrá ser objeto de publicidad en el perfil de contratante. En tal caso, el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. En el anuncio se identificará el objeto del contrato y las prestaciones que lo integran, los criterios de adjudicación, y cualesquiera circunstancias que hayan de tenerse en cuenta durante la ejecución del mismo. Podrá presentar proposición cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. **Los contratos menores adjudicados con publicación de un anuncio de licitación no limitarán la adjudicación de ulteriores contratos menores por el mismo procedimiento.** La celebración de contratos menores se consignará en el registro de contratos de la entidad contratante”

MODELO ESTÁNDAR PARA LA VALORACIÓN DEL CRITERIO “PRECIO” EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA

Febrero 2018

Versión actualizada (20 de febrero)

Juan Barberán González

Hay claridad en qué fórmulas no son correctas y se constata una tendencia compartida entre varias Juntas Consultivas de Contratación Administrativa y expertos en posicionarse a favor de las fórmulas "linealmente proporcionales". **Sin embargo, tampoco el hecho de utilizar una fórmula que se corresponda con una función lineal garantiza el cumplimiento de los principios de contratación pública** ya que, aunque se han empleado multitud de expresiones dentro de este grupo, los modelos concretos presentan inconvenientes en una u otra medida o según determinadas circunstancias.

Objetivo del Trabajo:

Profundizar en el análisis de las premisas en las que se debe basar el funcionamiento de una fórmula para cumplir con garantías los requerimientos de la normativa y/o principios de contratación pública y, a su vez, permitir una adecuada y eficiente gestión de los fondos públicos, con el objetivo final de definir un modelo que conjugue ambas cuestiones.

PREMISAS DE LA FÓRMULA:

1ª Proporcionalidad lineal entre la baja del precio y la puntuación otorgada.

Existe un consenso generalizado en que la fórmula debe ser linealmente proporcional (función lineal), es decir, la variación en el precio (o la baja) se debe traducir en una variación constante en la puntuación otorgada.

La existencia o no de proporcionalidad se pone de manifiesto a la vista de si varía o no la pendiente:

- En los casos en los que la representación de la fórmula es una línea curva o tiene tramos curvos es obvio que la función no es lineal. (fórmula de la baja media).
- Tampoco la función es lineal en los casos en los que la representación muestra varios tramos rectos con distintas pendientes.

- ✓ **Por tanto, la expresión que se utilice debería corresponderse con una función cuya representación gráfica sea una única línea recta (función lineal), de forma que se garantice que el esfuerzo económico realizado por el licitador tiene una recompensa en puntos siempre constante.**

2ª Control de la proporcionalidad entre las diferencias de bajas de precios y las diferencias de puntos.

A pesar de que la fórmula se corresponda con una función proporcional lineal son numerosas las recomendaciones o cuestionamientos que condicionan la expresión concreta a utilizar. En este sentido:

- .Existen recomendaciones para usar fórmulas de asignación de todos los puntos del criterio precio a la mejor oferta, porque no hacerlo resultaría contrario al principio de economía en la gestión de fondos públicos, pero está la postura que defiende la opción de que esto no puede ser considerado de aplicación universal a toda licitación, al poder desvirtuar el resultado de la aplicación de los criterios no sometidos a juicio de valor.
- .Se cuestionan las fórmulas que siempre otorgan puntuación, aunque no se realice baja sobre el precio de licitación, por entenderse que se desvirtúa la importancia del precio respecto al resto de los criterios de adjudicación aplicados.

Una de las opciones habitualmente usadas y que, a priori, conciliaría todos los requisitos, es aquella fórmula que da a la mayor baja (B_{max}) la máxima puntuación y cero puntos a no hacer baja, mediante la expresión (en adelante, "fórmula proporcional"):

$$P_i = P_{max} \times \left(\frac{B_i}{B_{max}} \right).$$

✓ **Sin embargo, se constata que con esta fórmula, en los casos en los que las bajas son pequeñas, las diferencias en puntos pasan a ser excesivamente grandes, tal y como se recoge en diferentes informes y resoluciones:**

- El informe de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) "Instrucciones del Interventor General de la Administración del Estado sobre las medidas de refuerzo del control para el cumplimiento del Plan de Revisión del Gasto y el Plan de Austeridad 2011 – 2013" establece que "En los expedientes de contratación en los que se propongan varios criterios de adjudicación, se analizará el peso relativo asignado al precio y se comprobará si en la aplicación de los criterios de adjudicación está prevista la utilización de fórmulas polinómicas que, en la práctica, pudieran dar lugar a que **diferencias importantes en los precios ofertados no reflejaran diferencias de la misma importancia en las puntuaciones asignadas**".
- En el mismo sentido, el referido Acuerdo 35/2015, de 17 de junio, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra también establece que: "(...) la forma de valorarlo no resulta neutra, pues dependiendo de **la fórmula utilizada**, el peso asignado al precio en la puntuación total puede sufrir matizaciones, por lo que procede analizar en el caso concreto si la misma **refleja que diferencias importantes en los precios ofertados refleje también diferencias importantes en las puntuaciones asignadas o, por el contrario, distorsiona o minimiza la ponderación atribuida por los PCAP al factor precio**".

Ejemplo:

Con un precio máximo de licitación de 1.000.000 € que se mantiene fijo y 4 ofertas presentadas (que en todos los supuestos mantienen la diferencia en precio entre ellas):

Supuesto 1) La baja máxima es del 20%

Precio ofertado	Diferencia precio (€)	% baja ofertado Bi	Variación %Bmax-%Bi	Puntos		Variación %Pmax-%Pi	K
				Pi	%Pi		
850.000	-	15,00%	5,00%	37,500	75,00%	25,00%	5,00
840.000	- 10.000	16,00%	4,00%	40,000	80,00%	20,00%	5,00
825.000	- 15.000	17,50%	2,50%	43,750	87,50%	12,50%	5,00
800.000	- 25.000	20,00%	0,00%	50,000	100,00%	0,00%	-
% Baja máxima		20,00%	Punt. máxima	50,00	100%		

Supuesto 2) La baja máxima es del 15%

Precio ofertado	Diferencia precio (€)	% baja Bi	Variación %Bmax-%Bi	Puntos		Variación %Pmax-%Pi	K
				Pi	%Pi		
900.000	-	10,00%	5,00%	33,333	66,67%	33,33%	6,67
890.000	- 10.000	11,00%	4,00%	36,667	73,33%	26,67%	6,67
875.000	- 15.000	12,50%	2,50%	41,667	83,33%	16,67%	6,67
850.000	- 25.000	15,00%	0,00%	50,000	100,00%	0,00%	-
% Baja máxima		15,00%	Punt. máxima	50,00	100%		

Supuesto 3) La baja máxima es del 10%

Precio ofertado	Diferencia precio (€)	% baja Bi	Variación %Bmax-%Bi	Puntos		Variación %Pmax-%Pi	K
				Pi	%Pi		
950.000	-	5,00%	5,00%	25,000	50,00%	50,00%	10,00
940.000	- 10.000	6,00%	4,00%	30,000	60,00%	40,00%	10,00
925.000	- 15.000	7,50%	2,50%	37,500	75,00%	25,00%	10,00
900.000	- 25.000	10,00%	0,00%	50,000	100,00%	0,00%	-
% Baja máxima		10,00%	Punt. máxima	50,00	100%		

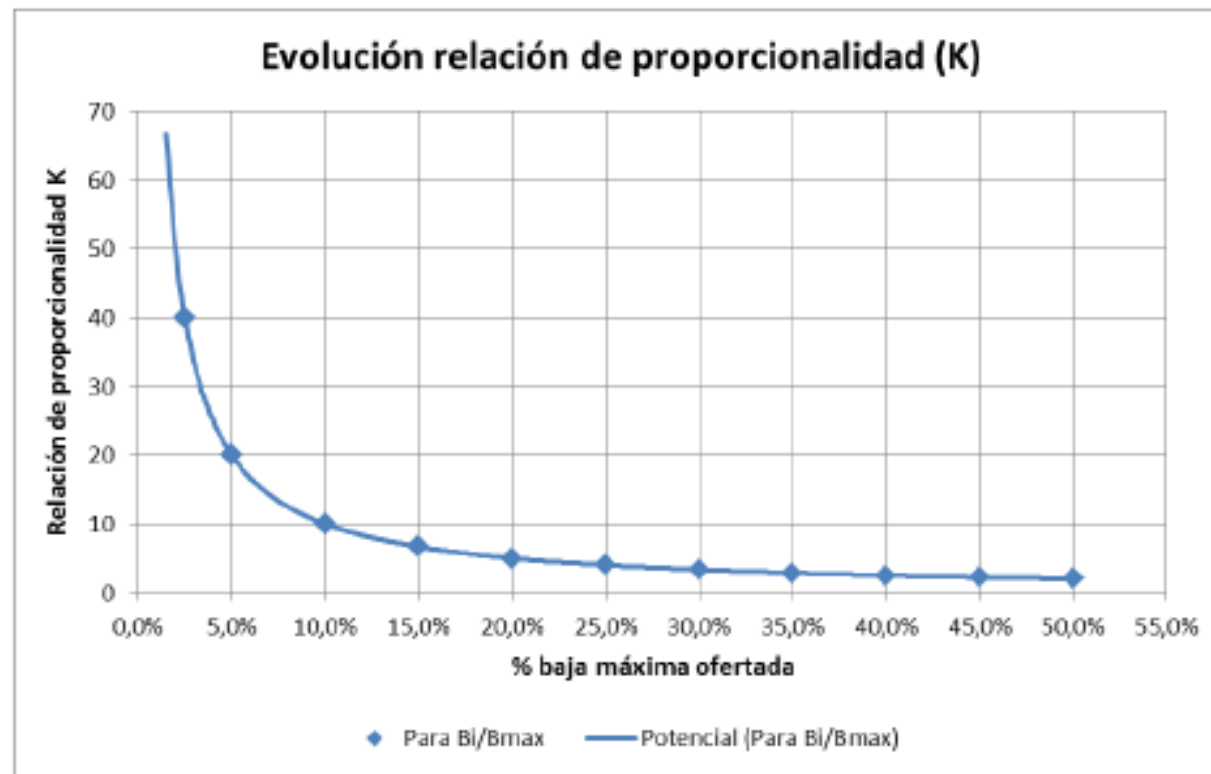
Supuesto 4) La baja máxima es del 5%

Precio ofertado	Diferencia precio (€)	% baja Bi	Variación %Bmax-%Bi	Puntos		Variación %Pmax-%Pi	K
				Pi	%Pi		
1.000.000	-	0,00%	5,00%	0,000	0,00%	100,00%	20,00
990.000	- 10.000	1,00%	4,00%	10,000	20,00%	80,00%	20,00
975.000	- 15.000	2,50%	2,50%	25,000	50,00%	50,00%	20,00
950.000	- 25.000	5,00%	0,00%	50,000	100,00%	0,00%	-
% Baja máxima		5,00%	Punt. máxima	50,00	100%		

Se observa que la diferencia de puntuación que se otorga entre dos ofertas que se diferencian en el mismo importe es mucho mayor cuanto menor es la baja máxima.

Resumen de los resultados de los supuestos anteriores:

Oferta	Diferencia precio (€)	Supuesto 1		Supuesto 2		Supuesto 3		Supuesto 4	
		Bmax 20%		Bmax 15%		Bmax 10%		Bmax 5%	
		Puntos	k	Puntos	k	Puntos	k	Puntos	k
Oferta 1	-	37,50	5	33,33	6,667	25,00	10	0,00	20
Oferta 2	- 10.000	40,00		36,67		30,00		10,00	
Oferta 3	- 15.000	43,75		41,67		37,50		25,00	
Oferta 4	- 25.000	50,00		50,00		50,00		50,00	



➤ **Conclusiones:**

1. Aunque **una función lineal** garantiza la proporcionalidad en la variación “precio/baja” frente a “puntuación obtenida”, ésta característica **no resulta realmente condición suficiente para medir la proporcionalidad de una fórmula a efectos de valoración del criterio precio.**

2. **El hecho de que haya o no proporcionalidad** en la valoración de las ofertas no está en la función correspondiente a la variable independiente “baja” frente la variable dependiente “puntuación obtenida”; sino que **está en la variable “diferencia entre las bajas” frente la variable “diferencias entre las puntuaciones obtenidas”** .

3. En definitiva, **la fórmula que se utilice debe controlar que la variación en las “diferencias entre las bajas” frente las “diferencias entre las puntuaciones obtenidas” sea constante y razonable,** es decir, significativa o relevante, pero no desproporcionada.

3ª No desvirtuar la ponderación entre el peso de los criterios técnicos y el peso del criterio precio y progresividad en la puesta en juego de todos los puntos.

- ✓ Si por una inadecuada fijación del criterio precio, la relación final entre la puntuación técnica y la puntuación económica no se ajusta a la relación calidad/precio preestablecida, se incrementa el riesgo de que el resultado de la adjudicación se desvirtúe, es decir, no se termine adjudicando a la oferta “realmente” más ventajosa.

En un proceso genérico de compra donde se busque la mejor relación calidad/precio, **cuanto más competitivas en precio son las ofertas y estas están muy cercanas entre sí**, es evidente que, el “denominador” (criterio precio) va tomando menor importancia y adquiere mayor peso el “numerador” (criterios técnicos). Llevado al extremo (precios iguales muy competitivos), la decisión sería por criterios técnicos.

- ✓ En este sentido, **en un proceso de contratación pública, el hecho de que finalmente no se pongan en juego todos los puntos inicialmente asignados al criterio precio, sería la consecuencia lógica**, al adquirir el “numerador” mayor peso en la relación “criterio técnicos / criterio precio”, **pero siempre que se haya conseguido que los precios ofertados sean competitivos (de mercado)**.
- ✓ Por tanto se podría concluir que el riesgo de que se pueda desvirtuar la ponderación entre los criterios técnicos y el criterio precio es mayor en los casos donde las bajas son pequeñas y en la medida en que los precios no tienden al umbral más competitivo posible.

Esto nos conduce a **dos objetivos para controlar dicho riesgo**:

- a)- Procurar la mayor competitividad posible de las ofertas económicas.
- b)- Que la fórmula mida lo competitiva que a priori sean las ofertas.

a) Mayor competitividad posible de las ofertas económicas.

Las principales acciones para alcanzar este objetivo pasarían por:

1. Conocer lo mejor posible el mercado de cada contratación (si hay competencia, si existen diferentes niveles de competitividad según diferentes tipos de contrato, si es un mercado maduro o nuevo, etc.).

2. Establecer una estrategia de contratación adecuada al tipo y/o la situación en la que se encuentra el mercado.

Esto, que supone determinar implícitamente el nivel de relación calidad/precio adecuado a cada caso, se preestablece en el pliego a través de:

- Elección de la ponderación entre puntuación técnica y puntuación económica.
- Dentro del criterio precio:
 - i. Estimación del umbral económico que, a priori, se considera más competitivo (relacionado directamente con el umbral de oferta anormalmente baja).
 - ii. Definición de la fórmula de valoración.
- Dentro de los criterios técnicos: Elección, diseño y ponderación de cada uno de los criterios, subcriterios y su puntuación.

3. Gestionar, de la forma más eficaz y eficiente posible, los factores que puedan afectar al riesgo de no recibir ofertas

competitivas: asegurar la concurrencia, definir las especificaciones técnicas de forma ajustada a las necesidades y con el mayor detalle y claridad posible, estimar el precio de licitación acorde con la realidad del mercado, predecir en la medida de lo posible el rango de normalidad en las ofertas, ...

b) Que la fórmula mida lo competitiva que a priori sean las ofertas.

La fórmula debe ser sensible en la medida en que las ofertas se aproximen a dicho umbral. Dicho de otra forma, la fórmula deberá otorgar la puntuación máxima total inicialmente asignada al criterio precio **cuando la oferta alcance un umbral que, a priori, se considere el más competitivo posible.** Así:

-En un supuesto de licitación con pequeñas bajas, **si la baja máxima, aunque sea pequeña, alcanza un umbral que, a priori, se considera el más competitivo, recibirá la máxima puntuación posible** y, por tanto, el resto de ofertas (que también serán bajas pequeñas) recibirán puntuación (en proporción razonable a las diferencias entre sus precios), incluida aquella que hubiera realizado una baja del 0%.

-Por el contrario, si, en este mismo supuesto, **la baja máxima no alcanza el umbral no recibirá la totalidad de la puntuación inicialmente asignada, en menor medida (menor puntuación) cuanto más se aleje de dicho umbral.**

De esta manera, se concilia la controversia que se deriva con respecto a poner o no siempre en juego la totalidad de la puntuación asignada al criterio precio.

4ª Modelo estándar para la valoración del criterio precio.

Se toma como punto de partida: $\frac{\text{Variación puntuación}}{\text{Variación baja}} = K$

Considerando todas las premisas y objetivos anteriormente abordados se llega a la siguiente expresión:

$$P_i = P_{max} \times \left\{ \left(\frac{B_{max}}{\left(\frac{1}{K} \right)} \right) - (B_{max} - B_i) \times K \right\}$$

Donde K será un valor predeterminado en el pliego para un rango concreto de bajas.

Tras las ofertas presentadas, si la baja máxima queda fuera de ese rango de bajas, el valor de K no será el valor predeterminado, sino que K será igual a $\frac{1}{B_{max}}$.

A efectos de una mayor facilidad en la aplicación por parte del gestor y mejor comprensión en la lectura del pliego, la expresión se simplifica, quedando de la siguiente forma:

$$P_i = P_{max} \times B_i \times K$$

Funcionamiento del modelo

El valor de K que se predetermine en el pliego se corresponde con un rango concreto cuyo umbral inferior será 0% y el umbral superior será la inversa del valor de K (en %):

Valor de K predeterminado	Rango de baja correspondiente
3	0% - 33,33%
3,33	0% - 30,00%
4	0% - 25,00%
5	0% - 20,00%
6	0% - 16,66%
8	0% - 12,50%
10	0% - 10,00%

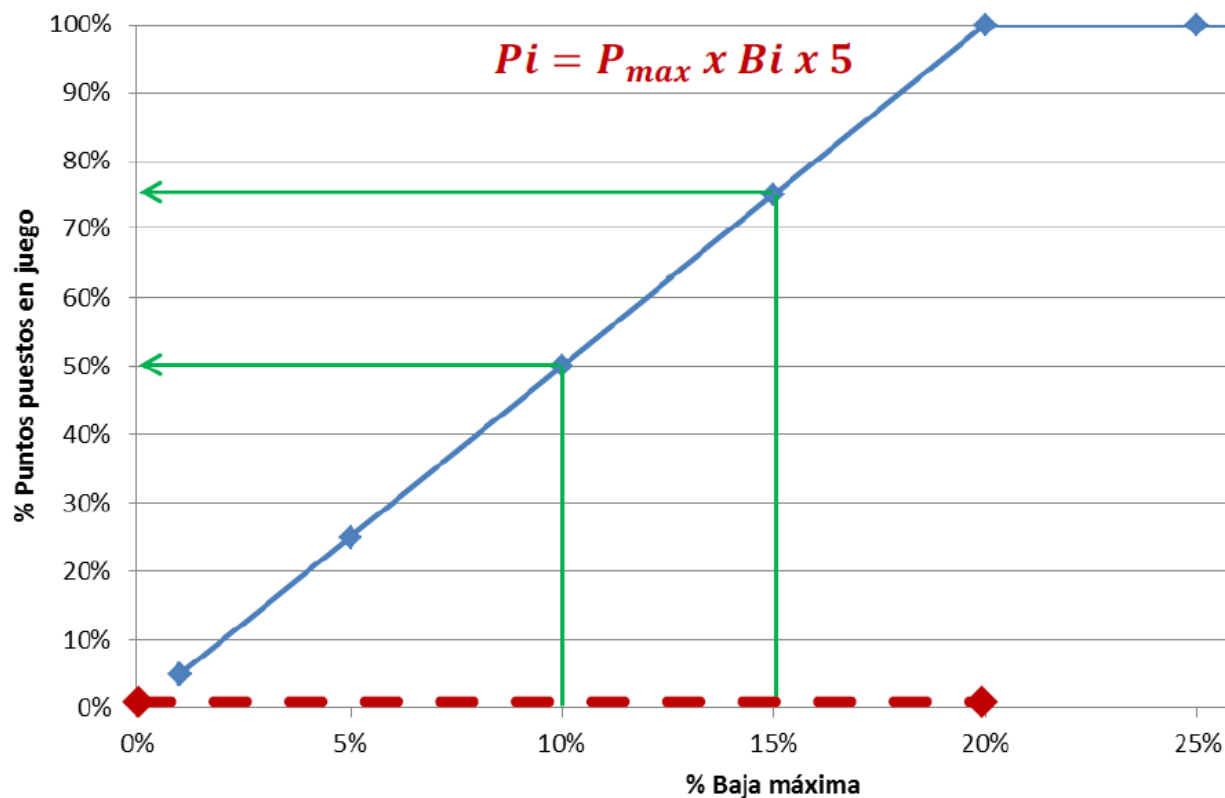
Una vez determinada la K en el pliego, ¿qué ocurre si, finalmente (en fase de calificación de ofertas), la baja máxima está dentro del rango?

- La oferta con mejor precio, y solo esta, obtiene la mayor puntuación.
- Hay proporcionalidad lineal en la relación "precio/baja" frente a "puntos".
- Una misma diferencia en precio entre ofertas tendrá "K veces" esa misma diferencia en puntuación entre ofertas.

Es decir, hay proporcionalidad controlada en la relación "diferencias de precios" frente a "diferencias de puntos".

Por ejemplo, para K=5 (rango de bajas: de 0 a 20%), la diferencia en puntos entre las ofertas será siempre 5 veces su diferencia en precio (un precio un 1% mejor que otro, tendrá una puntuación un 5% mejor).

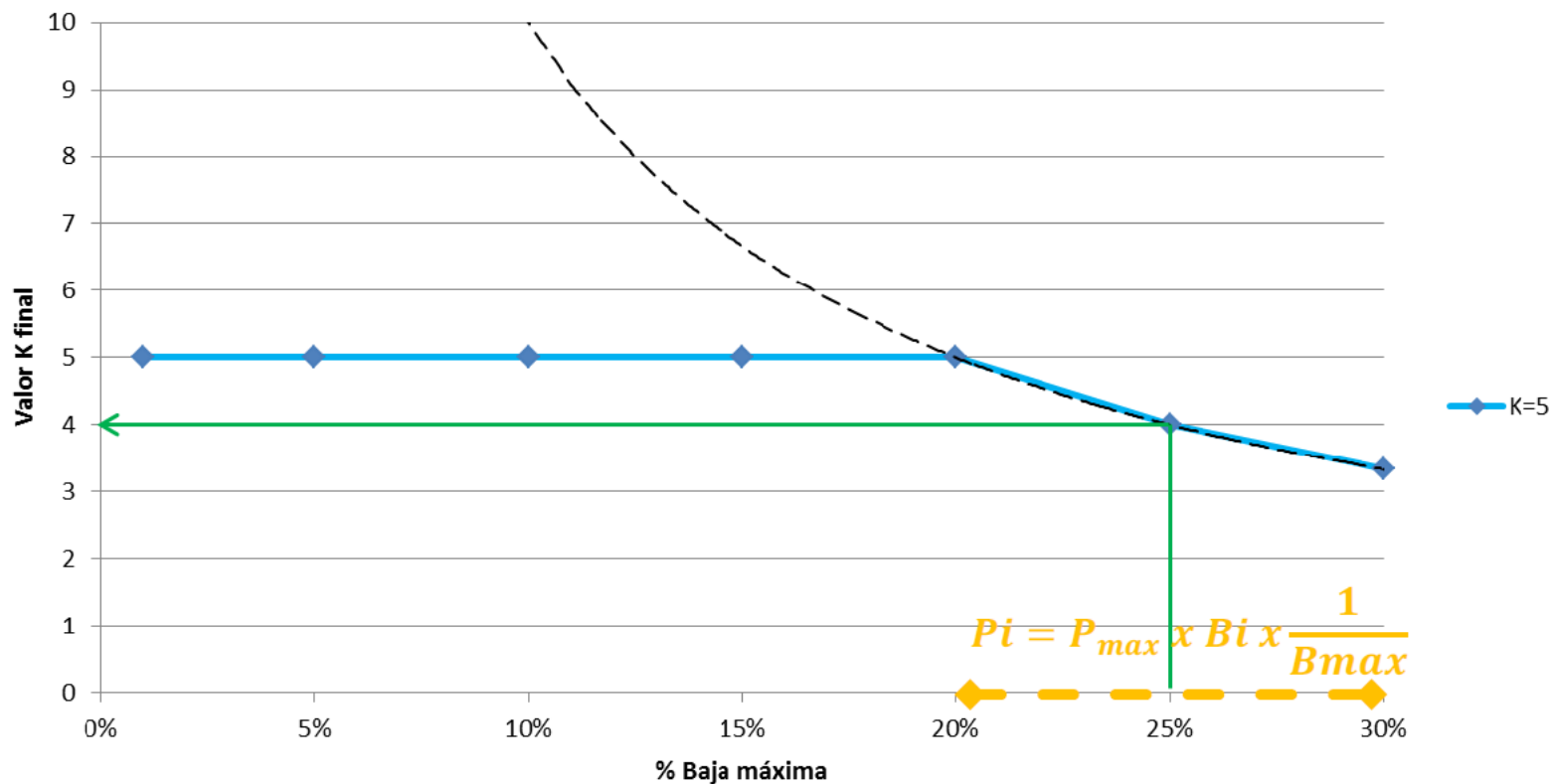
Cuando la mejor oferta (baja máxima) no alcanza el umbral ésta no recibe la totalidad de la puntuación inicialmente asignada, en menor medida cuanto más se aleje de dicho umbral (reducción lineal). Por ejemplo, si la baja máxima es un 10%, se pondrán en juego el 50% de los puntos, si fuera un 15%, los puntos en juego serían el 75%.



¿Qué ocurre si, finalmente, la baja máxima está fuera del rango?

- La oferta con mejor precio, y solo esta, obtiene la mayor puntuación.
- Hay proporcionalidad lineal en la relación "precio/baja" frente a "puntos".
- La baja máxima recibe siempre la totalidad de la puntuación máxima. Es decir, los puntos puestos en juego son todos los inicialmente asignados al criterio precio.
- Por contra, el valor K finalmente aplicado no será el valor preestablecido, será menor.

Es decir, una misma diferencia en precio entre ofertas tendrá una menor diferencia en puntuación entre ofertas que la correspondiente el valor K predeterminado, aunque siempre controlada (menor). Siguiendo el ejemplo anterior, si la baja máxima es del 25%, la K final aplicada en la fórmula será 4.



5ª Valor de K.

a. K óptimo.

Para cada licitación es necesario predeterminar un valor concreto de K.

- **Cuanto más bajo es el valor de K, más se reduce la pendiente de la función. En consecuencia, se corre el riesgo de que un valor de K muy bajo pueda suponer un factor desincentivador de la oferta económica y las ofertas no sean competitivas.**
- **Valor muy alto de K se corre el riesgo de desvirtuar la ponderación entre criterios técnicos y criterio precio (el peso de la puntuación técnica llegue a ser irrelevante) y, por tanto, incrementar el riesgo de que la oferta económicamente más ventajosa tras la aplicación de los criterios de valoración, no sea la oferta de mejor relación calidad/precio entre las ofertadas.**

A la vista de los riesgos anteriormente expuestos se concluye que **el valor de K óptimo en cada licitación es el que se corresponde con el UMBRAL QUE DELIMITA EL RANGO DE BAJAS NORMALMENTE ESPERADAS.**

Este umbral debe ser razonablemente estimado a la vista de las características de la compra y situación del mercado en cada caso.

b. Elección del valor de K en cada licitación.

En los casos en los que el pliego establezca que un umbral concreto de oferta anormalmente baja, el valor de K se determinará directamente y será el valor inverso de dicho umbral.

Fase de diseño del pliego	
Umbral oferta anormalmente baja	Valor de K predeterminado
30,00%	3,33
25,00%	4
20,00%	5
12,50%	8
10,00%	10

C. Recomendación en función del tipo de contrato

De forma general, se exponen las siguientes recomendaciones generales en función del tipo de contrato:

- Obras: se recomiendan valores bajos, entre 3 y 5.**
- Suministros y servicios: se recomiendan valores de medios a elevados, entre 6 y 10.**
- Servicios especializados o de alta cualificación: se recomiendan valores bajos, entre 3 y 5.**

6ª CONCLUSIÓN: Expresión matemática propuesta

$$P_i = P_{max} \times B_i \times K$$

Donde:

- **P_i** puntuación que otorga la fórmula a la oferta i.
- **P_{max}** puntuación máxima establecida en el pliego para el criterio precio.
- **B_i** baja de la oferta i ($\frac{\text{Precio máximo de licitación} - \text{Precio ofertado } (P_i)}{\text{Precio máximo de licitación}}$)
- **B_{max}** baja mayor de entre todas las ofertas.
- **K** Valor igual a ___ (entre 3 y 10, en función de la situación del mercado)
si la B_{max} ofertada resulta igual o inferior a la inversa del valor de K.

Si la B_{max} es superior, K será igual a $\frac{1}{B_{max}}$.

(En los casos en los que en el pliego se predetermine el umbral concreto de oferta anormalmente baja, el valor de K deberá corresponderse con el valor inverso de dicho umbral).

Resumen de las características del modelo

- ✓ Otorga a la oferta con mejor precio, y solo a esta, la mayor puntuación.
- ✓ Permite de antemano poner en juego todos los puntos asignados al criterio precio.
- ✓ Dependiendo de las ofertas presentadas (en concreto, de la baja máxima), puede suponer que no se pongan en juego todos los puntos.
- ✓ La variación en la baja realizada se traduce en una variación constante en la puntuación otorgada (función lineal).
- ✓ La variación de las "diferencias entre bajas" se traduce en una variación constante y controlada de las "diferencias entre las puntuaciones".
- ✓ La fórmula permite gestionar que no se desvirtúe la ponderación entre criterios técnicos y criterio precio.
- ✓ La expresión matemática es sencilla.

Juan Barberán González Director de Compras de CPEN jbarberg@navarra.es

ANEXO. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

a) ESCENARIO 1: BAJA MÁXIMA DENTRO DEL RANGO DE NORMALIDAD

Precio máx. (€) 100,000

Puntuación máx. 50

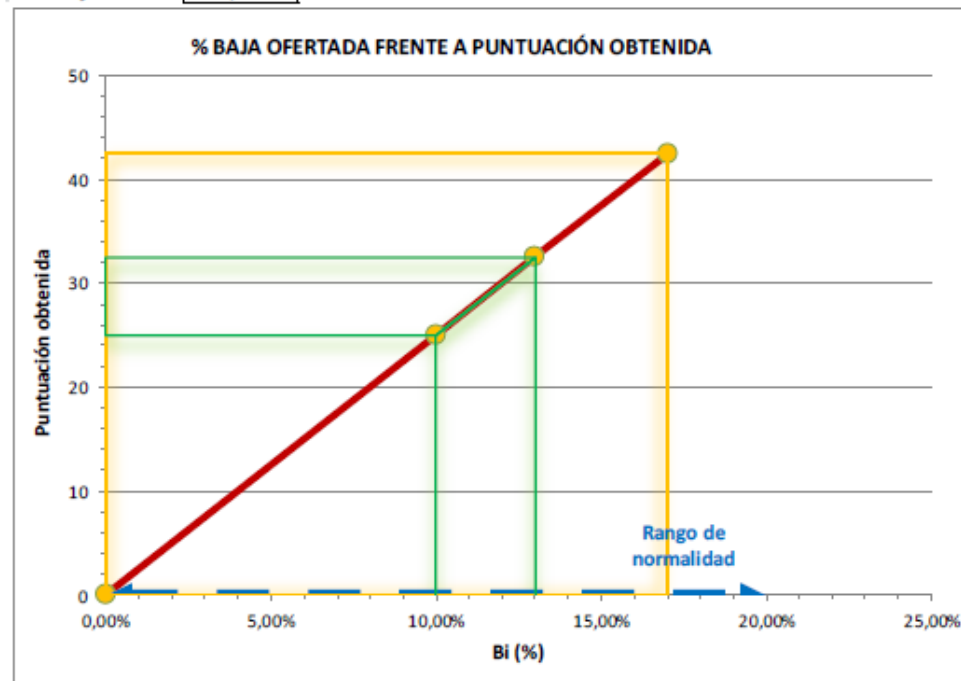
$$P_i = P_{max} \times B_i \times K$$

K = 5 si Bmax < 20% Rango de normalidad
 si Bmax > 20% K = 1/Bmax

Precio ofertado	Eje x	Eje y	Diferencia en puntos con la oferta anterior	"Esfuerzo"	"Proporcionalidad"
	% baja ofertado Bi	Puntos Pi		Reducción precio salida para conseguir cada punto	diferencias bajas / diferencias % puntos
100,000	0,00%	0,000	-	-	-
90,000	10,00%	25,000	25,00	400 €/punto	5,000
87,000	13,00%	32,500	7,50	400 €/punto	5,000
83,000	17,00%	42,500	10,00	400 €/punto	5,000



% Baja máxima 17,00%



d) ESCENARIO 1.BIS: BAJA MÁXIMA DENTRO DEL RANGO DE NORMALIDAD PERO DE UN VALOR PEQUEÑO (Baja máxima = 5%).

Precio máx. (€) 100,000

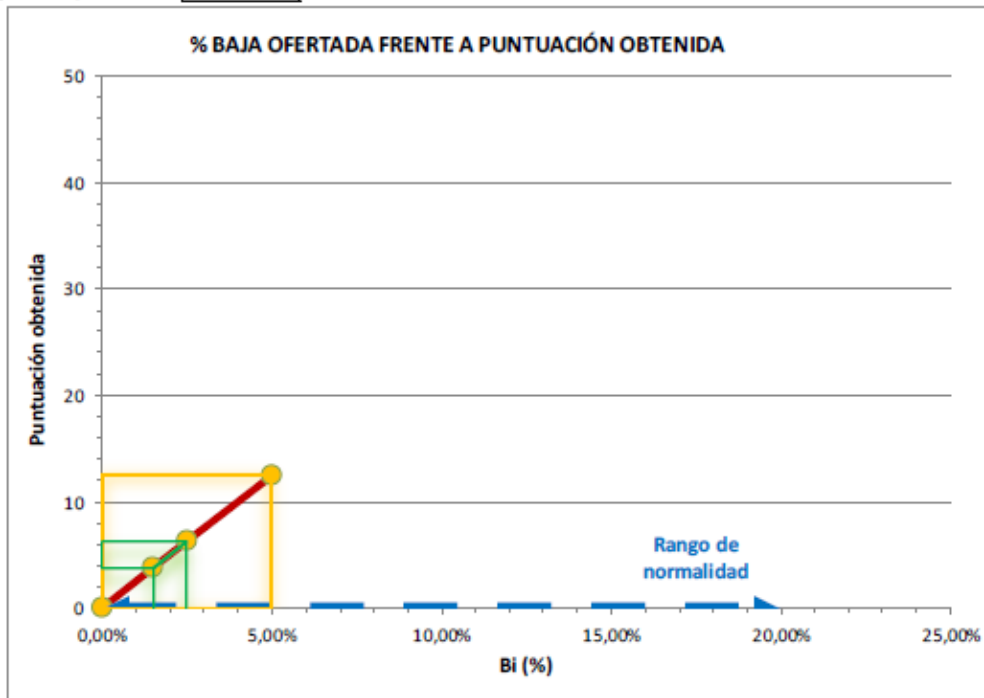
Puntuación máx. 50

$$P_i = P_{max} \times B_i \times K$$

K = 5 si Bmax < 20% Rango de normalidad
 si Bmax > 20% K = 1/Bmax

Precio ofertado	Eje x % baja ofertado Bi	Eje y Puntos Pi	Diferencia en puntos con la oferta anterior	"Esfuerzo" Reducción precio salida para conseguir cada punto	"Proporcionalidad" diferencias bajas / diferencias % puntos
100,000	0,00%	0,000	-	-	-
98,500	1,50%	3,750	3,75	400 €/punto	5,000
97,500	2,50%	6,250	2,50	400 €/punto	5,000
95,000	5,00%	12,500	6,25	400 €/punto	5,000

% Baja máxima 5,00%



b) ESCENARIO 2: BAJA MÁXIMA EN EL UMBRAL DE NORMALIDAD

Precio máx. (€) 100,000

Puntuación máx. 50

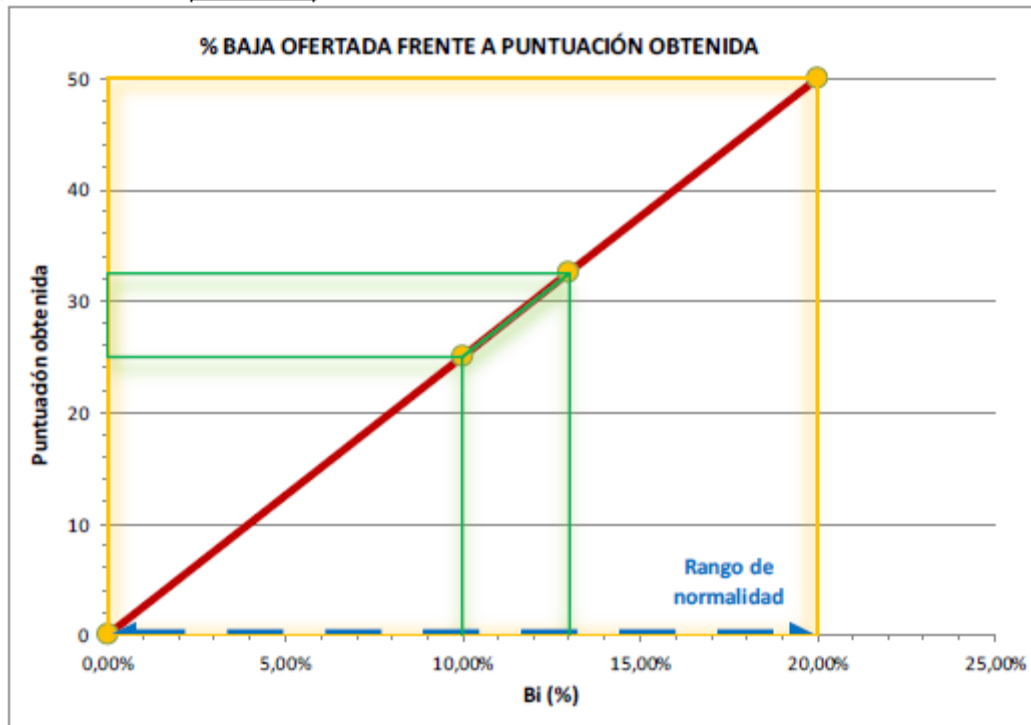
$$P_i = P_{max} \times B_i \times K$$

K = 5 si Bmax < 20% Rango de normalidad
 si Bmax > 20% K = 1/Bmax

Precio ofertado	Eje x % baja ofertado Bi	Eje y Puntos Pi	Diferencia en puntos con la oferta anterior	"Esfuerzo" Reducción precio salida para conseguir cada punto	"Proporcionalidad" diferencias bajas / diferencias % puntos
100,000	0,00%	0,000	-	-	-
90,000	10,00%	25,000	25,00	400 €/punto	5,000
87,000	13,00%	32,500	7,50	400 €/punto	5,000
80,000	20,00%	50,000	17,50	400 €/punto	5,000

▲ 90,000
▼ 87,000

% Baja máxima 20,00%



c) ESCENARIO 3: BAJA MÁXIMA FUERA DEL RANGO DE NORMALIDAD

Precio máx. (€) 100,000

Puntuación máx. 50

$$P_i = P_{max} \times B_i \times K$$

K = 5 si $B_{max} < 20\%$
 si $B_{max} > 20\%$ K = $1/B_{max}$ Rango de normalidad

Precio ofertado	Eje x	Eje y	Diferencia en puntos con la oferta anterior	"Esfuerzo"	"Proporcionalidad"
	% baja ofertado B_i	Puntos P_i		Reducción precio salida para conseguir cada punto	diferencias bajas / diferencias % puntos
100,000	0,00%	0,000	-	-	-
90,000	10,00%	20,000	20,00	500 €/punto	4,000
87,000	13,00%	26,000	6,00	500 €/punto	4,000
75,000	25,00%	50,000	24,00	500 €/punto	4,000

% Baja máxima 25,00%

